

DEDUCE RECURSO DE APELACIÓN.

**SRA. JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA I °
NOMINACION.**

**JUICIO: Giménez Liliana Esther C/ Herrera Mario Alberto Y Otro
S/ Daños Y Perjuicios. Expte: 116/22**

MARIA VIRGINIA TESSARI, MP 7568, Libro N, Folio 66, casillero digital N° 27314305294, cel: 3814686401, correo electrónico vir_tessari@hotmail.com, apoderada por la parte actora GIMENEZ LILIANA ESTHER, de las demás condiciones personales de autos, a VS digo:

I. DEDUCE RECURSO DE APELACIÓN.

Que atento a la sentencia Interlocutoria con fuerza de Definitiva recaída en fecha 14 de octubre de 2024, vengo en legal tiempo y debida forma, a interponer RECURSO DE APELACIÓN de conformidad con el artículo 766, 767 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, en contra de la mencionada sentencia, en base a las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer.

El recurso es admisible dado que es una sentencia interlocutoria con carácter definitivo; y causa gravamen irreparable.

II. ANTECEDENTES DEL CASO.

En fecha 06-03-2024 se interpone acción de daños y perjuicios en contra del Sr. Herrera Mario Alberto, conductor del vehículo marca Ford F-14000 dominio BKU 100 y se cita en garantía a SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES.

Antes de correr traslado de la demanda, se amplía datos del vehículo involucrado correspondiente al acápite CITACIÓN EN

GARANTIA, precisando que la cobertura se refiere al **camión marca Ford modelo F-14000 DOMINIO BKU 100.**, cuyo asegurado resulta Municipalidad de Famaillá.

Por proveído de Fecha 21-03-2024 en el acápite **V.** S. S. solicita a esta parte aclarar, previo a correr traslado de la demanda, y en relación a que el asegurado resulta MUNICIPALIDAD DE FAMAILLA, si AMPLIABA la demanda respecto a la MUNICIPALIDAD DE FAMAILLÁ, como titular registral.

Por presentación de fecha 27-03-2024 esta parte prestó cumplimiento con el punto V. del proveído de fecha 21-03-2024 precisando que **NO ampliaba la demanda contra la MUNICIPALIDAD DE FAMAILLÁ**, del siguiente modo: *“I. Vengo a dar cumplimiento a lo ordenado mediante el punto V del decreto de fecha 21/03/2024, a tal fin aclaro que no amplio demanda contra la Municipalidad de Famaillá.”*

Por decreto de fecha 4 de abril de 2024 se provee: **3)- Téngase presente lo manifestado por la letrada y por cumplido el punto V del proveído de fecha 21/03/2024 en relación a la ampliación de demanda.**

Por proveído de fecha 19-04-2024 se ordena correr traslado de la demanda a los accionados, conforme fue ordenado en proveído de fecha 08-03-2024: **“IX) Cumplido que sea el punto anterior, Cítese al demandado y a la citada en garantía, conforme el art. 118 de la Ley de Seguros N° 17.418; para que se apersonen a estar a derecho. Córrase traslado de la demanda y de la documental acompañada, para que en el plazo de QUINCE DÍAS contesten en los términos del art. 435 Procesal y/u opongan defensas previas conforme art. 426 y cctes. El incumplimiento a dicha carga procesal, dará lugar a lo dispuesto en los arts. 267 y 438 del CPCCT.”**

En esos términos la Litis quedó trabada en contra los demandados en autos, **HERRERA MARIO ALBERTO**, conductor del vehículo marca

Ford dominio BKU100 y la citada en garantía **SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES.**

Vencido el plazo para contestar demanda, el demandado HERRERA no comparece y se abre la causa a prueba por proveído de fecha 05-06-2024

La audiencia de proveído de pruebas que fue pospuesta para el día 13 de setiembre de 2024, fue notificada en domicilio real del demandado, por encontrarse rebelde. Luego de cursarse las notificaciones pertinentes de la fecha de audiencia al rebelde, esta parte es notificada de la suspensión de la audiencia de proveído de pruebas.

El decreto notificado a esta parte en fecha 13-09-2024 reza:

Monteros, 12 de septiembre de 2024.

I)- Atento a que, al contestar traslado del límite de cobertura, la actora planteó, entre otras cuestiones, la inoponibilidad a su mandante de la cláusula de exclusión de cobertura opuesta por la citada en garantía, previo a todo trámite: remítanse los autos a la Sra. Fiscal Civil a fin de que dictamine sobre la competencia de la suscripta para entender en la presente causa.

Ello así, atento a que -como refiere la propia actora al citar jurisprudencia de nuestro Cívero Tribunal- la consecuencia en caso de resultar admisible el planteo de inoponibilidad que formula la accionante, implicaría la posibilidad de que la aseguradora citada en garantía, repita el monto indemnizatorio pagado a las víctimas en contra de su asegurado, que en el caso es la Municipalidad de Famaillá, que no integra la litis en el presente proceso.

II)- Atento a lo ordenado precedentemente: Suspéndase la audiencia preeliminar y de proveído de pruebas fijada para el día 13/09/2024. Una vez resuelta la cuestión sobre la competencia, fíjese nueva fecha.

III)- Notifíquese telefónicamente a las partes del presente proveído, en razón de la proximidad de la fecha de audiencia suspendida.-ER FDO. DRA. LUCIANA ELEAS. JUEZA.-

Se cursa vista al agente fiscal civil a fin de que se expida sobre la competencia. El mismo entiende en su dictamen que es competencia del juez civil y comercial del Centro Judicial Monteros, aunque yerra en las

situaciones fácticas descritas y el fundamento que motiva su opinión al respecto de la materia propuesta.

III. LA SENTENCIA.

PRIMER AGRAVIO.

La sentencia del juez *a quo* omite mencionar que a raíz de lo expuesto en el proveído de fecha 12 de setiembre de 2024, corre vista al agente fiscal para que emita dictamen en consideración de que un posible resultado favorable a la pretensión de esta parte, y en consecuencia de la jurisprudencia imperante, no le sea oponible a la víctima la exclusión de cobertura planteada por la aseguradora citada, naciendo a favor de la aseguradora el derecho a repetir contra su asegurado, que no integra el proceso.

S.S. reconoce y afirma, en el decreto de fecha 12 de setiembre de 2024, como así también en la sentencia interlocutoria en crisis, que la MUNICIPALIDAD DE FAMAILLÁ, no integra esta Litis.

Debemos tener presente V.E que la Litis se encuentra trabada y por ello no es susceptible de ampliarse esta demanda, pues así lo indicarían principios rectores de nuestro derecho de forma, como el principio de preclusión procesal y progresividad de los actos.

El derecho de repetición que en el caso hipotético podría obtener la citada en garantía contra su asegurado, no puede afectar legítimos derechos de esta parte – **víctima del accidente de tránsito.**

Mucho menos esta parte tiene que prever y/o considerar la situación jurídica que producirá **SUS CONSECUENCIAS** para quien fuera condenada al pago.

La aseguradora citada, conoce o debió conocer que en casos como en el presente - declinación de cobertura por dosaje positivo del conductor y/o la pretendida declinación por falta de Registro - **no son defensas que resulten oponibles al tercero damnificado**, y en tanto, al contestar la

citación en garantía y plantear su exclusión de cobertura, **debió haber tenido en miras su derecho a repetición, integrando la litis con su asegurado.**

Era la citada en garantía la verdadera interesada en una posible acción de repetición, correspondiéndole integrar en todo caso al presente pleito.

Claro está que su procedencia hubiera encontrado sentido ÚNICAMENTE en cuanto fuera verdadero el “SUPUESTO RECHAZO” efectuado a su asegurado, porque en caso contrario, no cabría posibilidad de repetir. Se considera el siniestro aceptado.

Por tanto, **No puede el juez suplir la negligencia de la parte.**

SEGUNDO AGRAVIO.

El juez *a quo* ha considerado que es aplicable al caso el art. 32 de LOPJ por resultar el hecho alegado como la causa generadora de los daños y perjuicios cuya reparación se reclama es un siniestro vial en el que intervino el chofer de un vehículo de propiedad de la Municipalidad de Famaillá.

El artículo 32 de la LOPJ establece. Competencia Material. La Cámara en lo Contencioso Administrativo entenderá en las causas en las que **el acto o hecho jurídico constitutivo** de la acción sea de naturaleza administrativa o tributaria.

La sentencia trae a colación el fallo de nuestro más alto Tribunal en el proceso: “Ovejero Hortensia del Carmen vs. Noguera Alberto Miguel y Otro s/Daños y Perjuicios”, caso que en el cual se dirime un conflicto negativo de competencia, que sin embargo no resulta análogo al de autos.

La diferencia radica en que en el proceso mencionado la Litis se encuentra integrada por la Municipalidad de Las Talitas.

Dijo el fallo: “Para determinar la competencia en razón de la materia debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de la demanda y alegados

en sustento de la acción que se promueve. Lo relevante a tal efecto será la naturaleza o índole intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, con prescindencia absoluta del “derecho” –normativa positiva- que invoque el demandante” (CSJT, sentencia n° 502, del 20/06/01) De los hechos expuestos en la demanda surge que la actora inicia acción por daños y perjuicios en contra del Sr. Alberto Miguel Noguera por el daño físico y psíquico que le ha causado en ocasión de una acción irregular como encargado de cobranzas de la Municipalidad de las Talitas. Corrido el traslado de ley, el demandado solicita la integración de la litis con la Municipalidad de Las Talitas y se hace lugar a tal pedido en sentencia del 05/12/2012 (fs. 69). IV.-De lo expuesto se desprende que la situación fáctica constitutiva de la acción indemnizatoria promovida es de naturaleza administrativa, toda vez que la actora atribuye a un empleado de la Municipalidad de las Talitas un accionar presuntamente ilícito que causó le causó daños. En consecuencia, la causa queda aprehendida en la norma del art. 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán, que atribuye competencia material a la Cámara Contencioso Administrativo en las causas en las que el acto o hecho jurídico constitutivos de la acción sean de naturaleza administrativa o tributaria”

Como vemos, en el fallo citado por el *juez a quo* resulta que es el demandado quien solicita la integración de la Litis con la Municipalidad de Las Talitas, receptando su citación mediante sentencia, por ende la Litis en ese caso sí se integra con la presencia del estado municipal, siendo innegable la competencia de la Cámara Contencioso Administrativo.

En el caso de autos, la Litis no se encuentra integrada con ningún ente Municipal. En la especie hubiera resultado análogo, si esta parte en cumplimiento del previo ordenado por S.S. hubiera ampliado la demanda contra la Municipalidad De Famaillá.

TERCER AGRAVIO

Tampoco es dable aseverar que el conductor del vehículo asegurado, revista el carácter de empleado público, ya que para ello debe haber existido un acto administrativo que así lo declare, y ello no nos consta.

Es sabido y por todos conocido que el estado municipal echa mano de contrataciones privadas, lo que es a esta altura no resulta objeto de probanzas.

Sin embargo el demandado en autos, cuyo CUIT es 20-21336169-5 registra iniciación de una pensión no contributiva otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Receptar la incompetencia del juez civil en una acción entablada por la víctima de un accidente de tránsito contra el demandado, de quien no consta su relación de empleo público, agravia irreparablemente a esta parte, resultando conculcatoria de los derechos y garantías constitucionalmente establecidas.

Esta parte de ninguna manera ha aseverado que el conductor del camión municipal, revista carácter de empleado público.

CUARTO AGRAVIO.

La garantía de los jueces naturales significa la existencia de órganos judiciales preestablecidos en forma permanente por la ley. Juez natural es el juez legal, o sea el órgano creado por la ley conforme a la competencia que para ello la Constitución asigna al legislador.

El derecho a la jurisdicción consiste, precisamente, en tener posibilidad de acceso a uno de esos jueces naturales.

Cambiar el juez natural, por los fundamentos expuestos resulta una clara conculcación de las garantías constitucionales reconocidas, y a partir del año 1994, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el art. 26 2º párrafo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre no solo reproducen lo que expresa la Constitución, sino que también aluden a la necesidad de tribunales

establecidos conforme a leyes preexistentes y extiende expresamente a la aplicación de la garantía a otros juicios que no sean de la órbita penal.

Insistir en la incompetencia del juez civil es conculcatorio del debido proceso legal, la garantía del juez natural, y tutela judicial efectiva.

QUINTO AGRAVIO.

Aún cuando la sentencia se aparta de la posición del agente fiscal, vemos como su Dictamen no realiza un análisis real de las constancias de autos, pudiendo conducir a S.S. al indefectible equívoco por sostener en su Dictamen que la acción se dirige contra un municipio, lo cual es a todas luces desacertado.

El dictamen trae a colación cuestiones inexactas, y que por no ser vinculantes no fueron materia de exposición de esta parte. Es de destacar lo que refiere el agente fiscal civil en cuanto a que la demanda se entabla contra el propietario, lo que dista mucho de la verdad ya que siempre se sostuvo que el señor Herrera Mario Alberto conducía el vehículo asegurado.

Esta parte jamás ha aseverado que el señor Herrera, fuera el propietario del vehículo involucrado.

Argumenta el agente fiscal, a fin de pronunciarse sobre la competencia, que en base a la no existencia del contrato de seguro, la falta de legitimación pasiva del asegurador, la aseguradora no dará cobertura al asegurado, todas situaciones alegadas por la compañía aseguradora que en el caso de autos, no se encuentran probadas, y no pueden ser tenidas como válidas, dado que no consta prueba documental que acredite esos extremos y aún no se ha producido pruebas.

Continúa expresando el agente fiscal que el asegurado - MUNICIPALIDAD DE FAMAILLÁ- carece de derecho a exigir el pago, ya que no ha sido tomado a su cargo por el asegurador, y no percibió prima por él.

Recordemos que la oposición que efectuó la citada en garantía se basó en Defensas inoponibles ante el tercero de acuerdo a la pacífica jurisprudencia imperante. De su contestación de demanda no resulta opuesta falta de cobertura financiera o pago de la prima, sino todo lo contrario, la citada en garantía reconoció el contrato, su vigencia y la cobertura financiera.

Finalmente, el dictamen del agente fiscal concluye;

“No se advierte materia contencioso administrativa en la relación subyacente, que se agota en una acción de daños y perjuicios dirigida contra un municipio, y por lo tanto de una cuestión regida por el Código Civil, en los términos del art. 68 inc. 1º de la LOPJ.

En consecuencia, corresponde declarar la competencia de la Sra. Jueza Civil y Comercial Común de este Centro Judicial Monteros-17/09/2024”

El agente fiscal determina que la competencia resulta del juez *a quo*, pero yerra en expresar que la acción de daños y perjuicios se dirigió contra un MUNICIPIO, lo que jamás ha sucedido en autos.

SEXTO AGRAVIO.

Finalmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial es **conteste en sostener en su Art. 68.- Competencia Material: Los jueces en lo Civil y Comercial Común entenderán: 1. En todos los asuntos regidos por el Código Civil, Código de Comercio, leyes complementarias y especiales, no asignados de modo expreso a la competencia de otros fueros civiles....**

La misma norma reza en su artículo 69 que:

Art. 69.- Competencia Material. Los jueces en lo contencioso administrativo entenderán en las causas en las que el acto o hecho jurídico constitutivo de la acción sea de naturaleza administrativa o tributaria.

Como podrá observarse V.E, no resulta competente la Excma. Cámara Contencioso Administrativa. En los presentes obrados, HAY UN

HECHO JURÍDICO que de manera alguna CONSTITUYE una ACCIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA ni TRIBUTARIA.

Por lo expuesto, a V.S., respetuosamente, solicito:

IV. PETITORIO.

1) Por deducido y por fundado, en los términos del art. 767 del CPCCT el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de octubre de 2024.

2) Luego del trámite de ley, se eleven los autos al Superior.

3) Todo ello, con costas, en caso de oposición.

Proveer de Conformidad

Será Justicia.